NUEVA OLA
Revista Académica y Política · ISSN 3125-3407

A CONTRACORRIENTE · COLUMNA DE OPINIÓN N.º 6

Paraguay ante una doble crisis: del colapso bancario a la renuncia presidencial

Por Juan Antonio Alegre · Analista geopolítico
5 de noviembre de 2026



Foto: Daniel Duarte / AFP / Getty Images.

La intervención de Ueno Bank y el anuncio de renuncia de Santiago Peña abren un escenario de incertidumbre para Paraguay. Mientras las instituciones democráticas deben garantizar la continuidad del gobierno, el sistema financiero enfrenta el desafío de preservar la confianza de sus depositantes.

Paraguay atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre política y financiera de los últimos años. El procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad que había experimentado un crecimiento exponencial dentro del sistema bancario nacional, desencadenó una crisis que trascendió rápidamente el ámbito económico y terminó precipitando el anuncio de renuncia del presidente Santiago Peña, este jueves 5 de noviembre.

Para comprender la dimensión de los acontecimientos, resulta necesario observar el contexto del sistema financiero paraguayo. Durante los últimos años, el país se había destacado por mantener indicadores macroeconómicos relativamente estables, un sistema bancario en expansión y condiciones favorables para la inversión. La actividad financiera se encuentra regulada por el Banco Central del Paraguay (BCP), encargado de supervisar la solvencia y liquidez de las entidades, además de velar por la estabilidad monetaria y financiera. En ese contexto, Ueno Bank se había convertido en uno de los principales exponentes de la modernización bancaria paraguaya. Su modelo digital, la facilidad para acceder a productos financieros y una estrategia de expansión acelerada le permitieron alcanzar aproximadamente tres millones de clientes. Sin embargo, detrás de ese crecimiento comenzaron a surgir cuestionamientos relacionados con operaciones crediticias, vínculos empresariales y la calidad de sus activos.

La situación alcanzó su punto crítico el 2 de noviembre, cuando el directorio del Banco Central resolvió iniciar un procedimiento de resolución bancaria sobre la entidad, anunciado públicamente durante la madrugada del día siguiente. La medida respondió a la detección de una insuficiencia patrimonial que había reducido su índice de solvencia a menos de la mitad del mínimo legal exigido. La decisión generó consecuencias inmediatas. Miles de usuarios encontraron sus cuentas inaccesibles, mientras comenzaba a crecer la preocupación por el destino de los depósitos. Reportes periodísticos estimaron en aproximadamente 850 millones de dólares los fondos públicos depositados en la entidad, incluidos recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de prestaciones jubilatorias y sanitarias.

A partir de ese momento, la crisis financiera comenzó a transformarse en una crisis política. La vinculación del presidente Santiago Peña con el grupo empresarial propietario del banco, del que había sido accionista hasta marzo de 2025, y los antecedentes profesionales del entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien anteriormente había dirigido la entidad financiera, alimentaron los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la efectividad de los mecanismos de supervisión. El 3 de noviembre, Carvallo presentó su renuncia a la conducción del Banco Central, a pedido de Peña. Paralelamente, las investigaciones judiciales avanzaron sobre directivos y operaciones de Ueno Bank. Durante la jornada siguiente, el Congreso aprobó medidas destinadas a acelerar la devolución de fondos a los depositantes, mientras distintos sectores políticos comenzaron a reclamar responsabilidades institucionales.

La oposición impulsó un procedimiento de juicio político contra Peña, formulando acusaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos y el desempeño de los organismos de control. A medida que la controversia avanzaba, también comenzaron a manifestarse diferencias dentro del oficialismo, debilitando el respaldo político del presidente. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, mientras el Congreso debatía la posibilidad de avanzar con el juicio político, Santiago Peña anunció que presentaría su renuncia a la Presidencia de la República. En su mensaje, justificó la decisión en la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

La salida del mandatario deberá desarrollarse dentro de los mecanismos previstos por la Constitución paraguaya. El artículo 234 establece que, ante la vacancia definitiva de la Presidencia, corresponde al vicepresidente asumir la conducción del Poder Ejecutivo hasta completar el período constitucional. La Constitución también atribuye al Congreso la facultad de aceptar o rechazar la renuncia presidencial. Al cierre de esta columna, el Congreso aún debía pronunciarse sobre su aceptación. Si la acepta, Pedro Alliana asumirá la responsabilidad de

gobernar hasta agosto de 2028. Además, el 4 de noviembre se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra Alliana; no se trató de una votación en el Senado. La transición presidencial constituye solamente una parte de la solución. El nuevo gobierno deberá afrontar el desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía, garantizar la mayor protección posible a los depositantes y favorecer el esclarecimiento de las irregularidades investigadas. Al mismo tiempo, será necesario preservar la autonomía de los organismos de regulación financiera y evitar que las disputas políticas interfieran en el funcionamiento de las instituciones.

En el plano económico, el Banco Central y la Asociación de Bancos del Paraguay han sostenido que la situación de Ueno Bank corresponde a un caso particular y no representa, hasta el momento, una crisis generalizada del sistema. Los indicadores previos de solvencia y liquidez permiten reconocer que existen fundamentos para sostener esa posición. No obstante, la magnitud de los fondos comprometidos y la extensión de la cartera de clientes obligan a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos.

En definitiva, Paraguay enfrenta un desafío que excede la renuncia de un presidente o la caída de una entidad financiera. La continuidad constitucional puede ofrecer una respuesta a la incertidumbre política, pero la confianza económica requiere resultados concretos, transparencia y mecanismos de control eficaces. La verdadera dimensión de esta crisis todavía está por determinarse. La intervención estatal, la recuperación de los depósitos y la respuesta de las restantes entidades financieras serán determinantes para comprender su alcance. La gran incógnita que permanece abierta es si Paraguay está presenciando el colapso aislado de Ueno Bank o el comienzo de una crisis de confianza capaz de extenderse al conjunto de su sistema financiero. La respuesta no dependerá únicamente de la fortaleza de los bancos, sino también de la capacidad de las instituciones paraguayas para recuperar la credibilidad que los acontecimientos de esta semana han puesto a prueba.

Fuentes consultadas

Banco Central del Paraguay · Inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank
Banco Central del Paraguay · Pago del anticipo de la garantía a depositantes de Ueno Bank
Congreso Nacional · Constitución de la República del Paraguay
Cámara de Diputados · Presentación del pedido de juicio político contra Peña y Alliana
Associated Press · Renuncia de Peña y crisis de Ueno Bank
Reuters · Resolución de Ueno Bank y renuncia del presidente del BCP
EFE · Renuncia anunciada por Santiago Peña
ABC Color · ASOBAN sostiene que el caso no representa una crisis generalizada

Leer y compartir la versión web en revistanuevaola.ar